

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

En autos RIT 0-995-2022, RUC N° 2240385305-8, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se rechazó la demanda de declaración de existencia de una relación laboral, despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones interpuesta por don Mauricio Andrés Rodríguez Ossa en contra de la Municipalidad de Las Condes, concluyendo la existencia de un cometido específico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 18.883.

En contra del referido fallo el actor interpuso recurso de nulidad, que fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Santiago, por resolución de once de octubre de dos mil veintitrés.

En relación con esta última decisión la misma parte dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, para que, en definitiva, se lo acoja y se dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación en cuestión debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones recaídas en el asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna del o de los fallos que se invocan como fundamento.

**Segundo:** Que la unificación de jurisprudencia pretendida por el demandante dice relación con determinar la normativa aplicable a una persona natural bajo la modalidad de honorarios por organismos del Estado, en cuanto a si las funciones desplegadas corresponden o no a requisitos de contratación conforme a cometidos específicos y si se han ejecutado bajo índices de subordinación y dependencia.

Agrega que el fallo impugnado realiza una interpretación jurídica errónea de los artículos 4 de la Ley N° 18.883 y 1, 7 y 8 del Código del Trabajo, la que se contrapone a la contenida en los fallos de contraste que acompaña, en el sentido que, habiéndose acreditado elementos de subordinación y dependencia, en actividades continuas, genéricas y permanentes ejecutadas por un trabajador



respecto de un organismo público, debió tenerse por acreditada la existencia de una relación laboral.

Pide se acoja su recurso y se dicte la sentencia de reemplazo, declarando que la interpretación del fallo recurrido es errónea, con costas.

**Tercero:** Que la sentencia recurrida desestimó la nulidad que se dedujo en contra de aquella que rechazó la demanda, fundada, en lo que interesa, en las causales contempladas en los artículos 478 letra c) y 477 del Código del Trabajo, señalando, en síntesis, que no fue posible acreditar la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia, atendido que el actor se desempeñó, dada su profesión de abogado, como gestor técnico comunitario en el marco de programas denominados “Centros Comunitarios”, vinculados a la Dirección de Desarrollo Comunitario, cuyo cometido consistió en asistencia profesional de apoyo, celebrando contratos de honorarios con una duración determinada, prestando servicios durante tres años y dieciséis días, sin que se hubiera acreditado la existencia de elementos que permitieran configurar la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia, como el cumplimiento de horarios, la existencia de jornada laboral y el cumplimiento de instrucciones entregadas por superiores, concluyendo la existencia de cometidos específicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 18.883.

**Cuarto:** Que, para la procedencia del recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una materia de derecho, esto es, que, frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se haya arribado a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles, que denoten una divergencia doctrinal que debe ser resuelta y uniformada.

**Quinto:** Que, para dar lugar, entonces, a la unificación de jurisprudencia, se requiere analizar si los hechos establecidos en el pronunciamiento que se reprocha, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados como objeto del arbitrio, son claramente homologables con aquellos materia de las sentencias que se incorporan al recurso para su contraste.

Así, la labor que le corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma jurídica que regla la controversia, al ser enfrentada con una situación equivalente a la resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el fallo impugnado y aquellos traídos como criterios de referencia.

**Sexto:** Que en relación a la materia de derecho propuesta en el intento unificador, se acompañaron como sentencias de contraste las dictadas por esta



Corte en los autos roles N° 2.995-2018, N° 75.717-2022, N° 94.195-2020, N° 35.145-2016, N° 35.151-2017 y N° 6.445-2018, y realizado el examen de la concurrencia de los presupuestos enunciados en la motivación precedente, se puede concluir que tal exigencia no aparece cumplida en la especie, desde que no se cumple con el requisito de presentar concepciones o planteamientos jurídicos disímiles respecto de la sentencia que se impugna, y que denoten una divergencia doctrinal que deba ser resuelta y uniformada.

En efecto, las sentencias de contraste se pronuncian sobre la base de presupuestos fácticos diversos al del presente juicio, pues la primera se refiere a una demanda interpuesta por un trabajador que se desempeñó durante un año y tres meses para la Municipalidad de La Reina, como gestor territorial en el contexto de un Programa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) del órgano edilicio, debiendo cumplir con horario fijo, jornada laboral y rendición de cuenta de sus funciones en forma permanente, concluyendo que *“...el artículo 4 de la Ley N° 18.883, establece la posibilidad de contratación a honorarios como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la administración puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual...sin embargo, en el caso que las funciones realizadas en dicho contexto, excedan o simplemente no coincidan con los términos que establece la normativa en comento, sino que revelan caracteres propios del vínculo laboral que regula el Código del Trabajo, es dicho cuerpo legal el que debe regir, al no enmarcarse sus labores en la hipótesis estricta que contempla el artículo 4 señalado”*.

Por su parte, en la sentencia pronunciada por esta Corte en los autos rol N° 75.717-2022, razona, en el contexto de diversos contratos a honorarios celebrados por el demandante con la Municipalidad de Temuco, para el desempeño como abogado durante dieciséis años, en diversos programas vinculados con la asistencia técnica en la oficina de la vivienda, ejecutando funciones de preparación de todas las demandas en que la municipalidad fuera parte, la confección de oficios a diversas instituciones, la interposición de querellas y reclamaciones, así como la elaboración de informes, todos en un horario y jornada determinada, con obligación de asistencia y sujeto a la dependencia e instrucciones de jefaturas, concluyendo, sobre la base de dichos presupuestos fácticos, la existencia de una relación laboral regida por el Código del Trabajo.

Lo mismo ocurre con el fallo dictado en autos rol N° 94.915-2020, en que esta Corte declaró la existencia de una relación laboral entre la actora y la Municipalidad de Maipú, por haberse desempeñado durante seis años en diversos



programas vinculados al plan operativo de seguridad ciudadana, dependientes de la Dirección de Prevención y Seguridad del municipio, ejecutando funciones de recopilación de información, atención de usuarios y participación en móviles de seguridad, acreditándose la existencia de una jornada de trabajo, el cumplimiento de horario y el poder de mando de superiores respecto de las funciones encomendadas.

A su vez, en la sentencia dictada por esta Corte en el rol N° 35.145-2016, se concluyó la existencia de un vínculo de naturaleza laboral entre el actor y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acreditándose un desempeño durante un año en funciones genéricas que excedían el marco de los proyectos para los que fue contratado, los cuales prestaba en jornada completa, con cumplimiento de horarios, y sujeto a las instrucciones de superiores.

En los autos rol N° 35.151-2017, esta Corte declaró la existencia de una relación laboral entre el demandante y la Municipalidad de Arica, por haberse desempeñado durante cinco años y diez meses en diversos programas vinculados a la Dirección de Aseo y Ornato, ejecutando funciones como establecer contactos con redes sociales de apoyo y empresarios, realizar charlas de capacitación en talleres eléctricos, carpintería y áreas verdes y otras actividades genéricas, estando sujeto a la obligación de permanecer en su lugar de trabajo, además de cumplir requerimientos adicionales en horas de la noche, fines de semana y días festivos, así como a las órdenes e instrucciones impartidas por el municipio, descartando, sobre la base de tales hechos, el carácter de excepcionales, esporádicas, transitorias y específicas de tales funciones, lo que impide justificar la contratación a honorarios.

Finalmente, el fallo de contraste dictado por esta Corte en el Rol N° 6445-2018 razona respecto de un demandante que prestó servicios durante quince años para la Subsecretaría de Transporte, ejecutando labores de fiscalización en el Programa Nacional de Fiscalización de dicha entidad, concluyendo la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia, al estar sujeto a jornada laboral, cumplimiento de horario, supervisión de actividades, obediencia a las instrucciones impartidas por el empleador.

**Séptimo:** Que, de lo expuesto, queda de manifiesto que los fallos acompañados por el recurrente no contienen una distinta interpretación sobre la materia de derecho objeto de este juicio, pues se dictaron sobre la base de antecedentes de hecho distintos al de marras, no cumpliéndose con el presupuesto contemplado en el inciso segundo del artículo 483 del Código del Trabajo, lo que conduce a desestimar el presente recurso de unificación de jurisprudencia.



Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del ramo, **se rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia** interpuesto por la parte demandante en relación con la sentencia de once de octubre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase.

Nº 244.807-2023.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Soledad Melo L., y las abogadas integrantes señoras Fabiola Lathrop G., e Irene Rojas M. No firma la ministra señora Melo y la abogada integrante señora Rojas, obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso la primera y por estar ausente la segunda. Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.



DYJLXQFXCJC

En Santiago, a veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

